

Bolivia en el siglo XXI:
¿Pluris?, ¿multis? ¿Qué tal semiautónomos?

Raúl Peñaranda U.

Recordando septiembre de 2000

Cuando Carlos Sánchez Berzaín era el poderoso ministro de Gobierno de la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, prohibió que se masticara coca en las reuniones que mantenía en su ministerio con dirigentes cocaleros y de otros sectores. La coca era ilegal y debía ser eliminada, aún la usada para fines tradicionales.

Era el momento cúlmine del desprecio de la Bolivia oficial por las otras bolivias y de los gobiernos de turno por los movimientos sociales. Era el momento en que la visión occidental-neoliberal de una élite en auge, se imponía sin cuidar las formas sobre los valores más bien comunitarios y colectivistas de los pueblos originarios bolivianos. Siete años después de la actitud de Sánchez Berzaín y del sector que él representaba, la historia le ha dado en las narices. No solo centenares de miles de bolivianos, acaso millones, siguen acullicando, sino que el líder cocalero más importante del país, Evo Morales, descalificado como “terrorista” por Sánchez de Lozada y acusado sin pruebas por la alianza ADN-MNR-MIR-NFR-UCS-Embajada para expulsarlo del Congreso, es hoy el jefe de la oposición, tiene la segunda bancada parlamentaria más importante y ganó en la región en la que tiene influencia (el Chapare) con un resultado inédito incluso a nivel mundial.

Así que la Bolivia oficial no pudo aplastar a la otra, ni con amenazas, estados de sitio o prohibiciones de acullicar. Cuánto habrá cambiado la situación del país para que Sánchez Berzaín, otra vez como ministro en el año 2002, haya aceptado acullicar junto al dirigente Felipe Quispe, después de haberse visto obligado a trasladarse hasta la remota localidad de Amahuaya. De prohibir pijchar en su despacho hace unos años, ahora lo hace en una comunidad rural.

Probablemente 1952 fue la primera mecha, nunca convertida en hoguera, que se encendió contra esa visión autoritaria que afectaba a indígenas y campesinos y, si vamos más lejos, pionero fue el intento de incendio frustrado de Túpac Katari de 1781. Pero ante tanta imposición, las brasas se encendieron de golpe otra vez en abril y septiembre de 2000 y los indígenas pudieron, por primera vez en décadas, poner al país de cabeza y sentirse, por una ocasión, dueños de la situación.

Se estaban vengando de centurias de marginamiento, desprecio, privación del derecho a expresarse; de la actitud, en fin, de innumerables sanchez berzaínes que habían tratado siempre de obligarlos a hacer cosas que no querían. Como abstenerse a acullicar en una reunión con autoridades.

Siete años después la situación había cambiado cualitativamente de una manera insólita. No solo que se podía acullicar en las reuniones, sino que éstas se realizaban en la misma localidad de Achacachi, donde se aburrían ocho ministros obligados a aceptar los desplantes de Felipe Quispe.

Pero mientras se ponía en riesgo el principio de autoridad del país, se estaban abriendo, al mismo tiempo, las compuertas hacia una mayor integración y hacia una relación más igualitaria entre los diferentes sectores sociales y económicos que integran Bolivia.

Los miedos de unos y el arrojo de los otros ponían frente a frente, de manera inéditamente horizontal, a dos sectores que han vivido desde hace siglos de una manera completamente +inigualitaria+ y vertical, los unos sometidos por los otros.

En septiembre de 2000 se dio una coincidencia feliz: El gobierno no podía implantar un Estado de Sitio, que es el mecanismo usado como reflejo por quienes detentan el poder, para poner en orden a quienes buscan cambios sociales o económicos. Por suerte. Quienes pedían que se muestre un poco de autoridad lo que estaban pidiendo en realidad era seguir cerrando las compuertas de diálogo entre segmentos de la población y empujaban al país al abismo de un baño de sangre.

¿Pero por qué no se podía implantar el sempiterno Estado de Sitio? Porque cinco meses antes, en abril, se había decretado uno, el más chapucero de los estados de sitio que se tenga memoria. Se asumió la medida con su principal ejecutora, la Policía, amotinada, sin una estrategia clara y sin objetivos identificados, excepto el muy ambiguo de controlar las protestas sociales de Cochabamba por el tema del agua. Como se comprobó después, el estado de sitio chapucero no sirvió de nada. El gobierno terminó anulando el contrato con Aguas del Tunari –que era lo que reclamaban los manifestantes– y esa decisión fue la que logró que retornara la tranquilidad. Si se iba a rescindir el contrato de todas formas, ¿para qué decretar el Estado de Sitio? Eso pasa cuando los gobiernos no están a la altura de la circunstancias. Pero en este caso habría que decir, “afortunadamente”.

Como decimos, ese estado de sitio de abril de 2000 impidió decretar otro en septiembre, que era la tentación del poder político. Como la Constitución Política del Estado prohíbe aprobar dos medidas de excepción en el mismo año salvo autorización expresa del Congreso, y como convocarlo para esos fines no era una idea muy presentable, al Poder Ejecutivo no le quedó otra alternativa que hacer algo que ningún gobierno había hecho realmente desde 1985: escuchar. El estar atado de manos por la imposibilidad de usar la fuerza obligó al ejecutivo a bajar de su pedestal y, con mala cara, atender a sus moteros (en español) interlocutores. Fue lo mejor que pudieron hacer. Resulta que los campesinos no querían la ley INRA, cuando el MBL nos había vendido muy bien el cuento de que representaba a los campesinos y por tanto daba fe de que estaban felices con esa norma. Resulta que tampoco estaban de acuerdo con la ley de aguas, que podrá servir muy bien en Nueva York (su aprobación era una de las exigencias de los organismos internacionales) pero no en Bolivia. Y conocimos decenas de otros pedidos. Estos, algunos excesivos e irrealizables, ocultaban en realidad otro aspecto, más importante: los indígenas y campesinos que interpelaban al poder en Achacachi daban rienda suelta a su necesidad de hacer la catarsis histórica de expresarse. Habían estado demasiado tiempo en silencio. Querían hablar. Y hablar de igual a igual.

Maniatado por la imposibilidad de decretar el Estado de Sitio, el poder político escuchó a los campesinos porque estos lo obligaron, no porque la Bolivia oficial hubiera tenido, de un momento a otro, un cambio radical de actitud y un súbito interés por conocer las ideas y opiniones de los aimaras y quechuas. Lo que la forzó a hacerlo fue el más exitoso plan de bloqueos camineros registrados en la historia, difícilmente controlables policial o militarmente. Es que solo a la fuerza se realizan las cosas en Bolivia, puesto que nuestra democracia formal impide que las demandas de los distintos sectores se canalicen de una manera más o menos racional, aunque en el futuro ello podría (así, en condicional) empezar a cambiar debido a la fuerte presencia indígena en el Congreso después de las elecciones del 30 de junio. En septiembre de 2000, por el contrario, el viejo Parlamento se mantuvo como un actor absolutamente ausente y necio. En una situación similar, la actitud del Congreso actual sería completamente distinta.

Así que, impedido de echar mano al garrote, el poder político tuvo que agachar la cerviz, reconocer sus errores y firmar apresurados compromisos con el Mallku y sus seguidores.

Nunca antes había ocurrido algo así. El 21060 se impuso por la fuerza, con muertos y confinados. Los enfrentamientos con los maestros terminaron siempre por la fuerza, con muertos y confinados. La erradicación de la coca se hizo siempre con muertos. La capitalización y la reforma educativa se hicieron con muertos.

Y haber presionado siempre hasta el límite a los movimientos sociales empezó por hacer eclosión a fines de agosto de 2000, exactamente 15 años después de implantado – con muertos– el modelo de libre mercado y tras 500 años de oídos sordos. En algún momento debía terminar esa lógica. Era como un dique de contención que empezaba a romperse. Las primeras resquebrajaduras se vieron en abril y septiembre de 2000. Y la represa pareció ceder el 30 de junio de 2002.

Problema de representatividad

Aunque la pintura de la historia de estos tiempos puede estar todavía fresca, nos podemos permitir señalar algunas conclusiones, como la de que, si bien los estallidos sociales tuvieron componentes económicos, el problema +central+ de Bolivia no es económico, como suele pensarse, sino de representatividad. Por tanto, es definitiva y profundamente político. Es cierto que el país atraviesa por una severa crisis económica desde hace tres o cuatro años pero ella no ha afectado casi la situación de los bolivianos más desposeídos, que no se enteran siquiera que hay crisis: su situación es tan mala que no sienten los altibajos. Ellos ya tocaron fondo, no podían estar peor. Que la economía crezca un cuatro por ciento o decrezca en un tres por ciento no le hace diferencia a quien vive en una economía eufemísticamente llamada de subsistencia, no envía a sus hijos a la escuela porque no hay una en 20 kilómetros a la redonda, no ve TV porque ni siquiera tiene electricidad y no lee un periódico porque es analfabeto. Y no vende más productos agrícolas porque no hay un camino de acceso a ningún centro poblado.

Al ser el problema boliviano +fundamentalmente+ de representatividad, más que económico (aunque la pobreza y la marginalidad son obviamente muy importantes), facilita y perjudica, paralelamente, las cosas: para dejar de ser pobres necesitamos por lo menos 60 años, si el país pudiera crecer sostenidamente a más de un cuatro por ciento anual ininterrumpidamente y la distribución del ingreso cambiara radicalmente, algo que se ha demostrado difícil. Es un intento que hay que seguir haciendo por varias razones, incluídas las morales. Pero ese intento no servirá de nada si no va acompañado por imprescindibles reformas políticas.

Los problemas de representatividad pueden ser resueltos antes que los económicos, pero el proceso puede ser traumático. Ya lo ha sido en los últimos años con violencia y estados de crisis permanentes, pero podría ser peor.

Cuando Felipe Quispe dice que la bandera boliviana, los libertadores Bolívar y Sucre y los otros símbolos no representan a los pueblos aimara y quechua, está diciendo algo cierto. No hay más que pasear por algunas localidades rurales para comprender que los ritmos de la vida allí, los sentimientos, los valores y la visión de futuro no tienen nada que ver con esa Bolivia oficial. Cuando me tocó entrevistar a los sobrevivientes del terremoto de Aiquile en las zonas rurales de Cochabamba, el 80 por ciento de ellos no hablaba español. Tuve que contratar un intérprete. Hubiera sido ocioso preguntarles si Bolívar, Sucre y la escarapela nacional significan algo para ellos. Sus valores y cosmovisión está muy lejos de la iconografía patriótica oficial.

Martin Luther King decía que para un negro estadounidense era muy difícil identificarse con personajes como Washington o Jefferson e incluso Lincoln y que símbolos como la Estatua de la Libertad tampoco le decían nada. Por eso es que han sido recurrentes en la historia norteamericana las tendencias de ciertos grupos minoritarios de tratar de +abandonar+ el territorio norteamericano y volver a los pueblos de origen, por ejemplo los de Africa. Por supuesto que esa decisión es impracticable de manera masiva debido a una infinidad de dificultades sociales, económicas e incluso prácticas. Pero refleja el grado de disociación entre ciertos grupos sociales y el sentido de nación.

En Bolivia ocurre algo similar. La tricolor no significa nada para millones de bolivianos. Túpac Katari, como dice Quispe -y es cierto- también fue un héroe de la independencia, pero su imagen pintada con aire real no aparece en el frontis de los colegios y escuelas como sí están los de Bolívar y Sucre, ninguno de los dos nacidos en suelo patrio, además.

En otros países, como en Bolivia, hay gruesos sectores de la población que están marginados del mercado y que viven en la indigencia. Pero ello no les quita su sentido de pertenencia nacional. Pero en Bolivia, además de esa marginalidad, está la de quienes sienten que no pertenecen a la nación. Empezar a cambiar eso es el desafío de ésta y de la próxima generación. Porque si me siento representado, me siento partícipe; y si me siento partícipe ya no deseo abandonar mi territorio –como ocurría con ciertas minorías de EEUU– o pretender que los +otros+ (en Bolivia, los blancos) “se vayan porque son extranjeros”(Por cierto, estos tercermundistas marginados por los k’aras del mundo ¿Adónde se irían? ¿A lavar platos a EEUU?).

Si el problema es +mayormente+ de representatividad, entonces hay que hacer esfuerzos por aumentarla, por profundizarla. [La economía deberá además crecer y dar frutos sin la exasperante lentitud registrada entre los censos de 1976 y los de 1992 y 2001. En ese período la pobreza rural bajó del 99 al 92 por ciento].

Un gran salto de representatividad se dio el reciente 30 de junio con casi un tercio de los parlamentarios electos provenientes de los pueblos indígenas. Bolivia es, está claro, un país de paradojas: de tener uno de los regímenes menos representativos, ha pasado a la cabeza en toda América Latina: ya quisieran Perú, México, Guatemala El Salvador y otras naciones con fuerte presencia indígena haber logrado lo que se obtuvo sin disparar un tiro el 30 de junio: un tercio del Parlamento en manos de los indígenas. El salto en Bolivia es tan insólito que hace cinco años había solo cuatro parlamentarios (ahora son 40) y hace diez no había ninguno (con excepción de algunas “rarezas” de partidos como Condepa).

Pero no es suficiente. Es necesario profundizar los mecanismos para asegurar que la presencia indígena congresal se consolide no decaiga en el futuro y que se acreciente en otros ámbitos.

Respecto del Congreso, es necesario debatir la necesidad de reformar la Constitución Política del Estado para que el 100 por ciento de los parlamentarios (incluidos los senadores) sean elegidos en circunscripciones uninominales. Esa simple reforma es en parte la explicación del aumento de la participación indígena en el Parlamento. Si el 100 por ciento de las bancas parlamentarias tuvieran que ganarse a puro pulmón, los candidatos tendrían que ser mejores y, además, hacer un mejor trabajo durante su gestión si él y su partido tienen la aspiración de retener ese curul. Ese aspecto no ha terminado de funcionar bien en los cinco primeros años de existencia de los uninominales (1997-2002), pero el sistema es demasiado nuevo como para no confiar en él. Más bien apostando por él se conocerán los frutos. Y este sistema, además, no solo ayudaría a mejorar la representatividad indígena, sino la representatividad a secas.

Buena parte de los parlamentarios son desconocidos por la opinión pública, que

inclusivo detesta a algunos de ellos. Baste citar los casos de Gonzalo Valda o Gastón Encinas, que pudieron haber logrado entrar al Congreso gracias a las listas de candidatos plurinominales. Y si esos personajes ganaran como uninominales, querría decir que se lo merecen. Habrán ganado con +dignidad.+

Habría que añadir que el problema del país es también de legitimidad. Y allí los partidos tradicionales han sido también culpables del desencanto actual. La situación sería bastante mejor, aún con la crisis económica actual, si desde hace una década y media los partidos se hubieran depurado, si hubieran castigado la corrupción, si hubieran sumado a sus filas a independientes capaces y honestos, si se hubieran democratizado internamente. No es por causalidad que ocurren las cosas y el voto castigo del 30 de junio estaba sancionando una forma de hacer política.

Hacia las semi-autonomías

Ya no cabe duda, por cierto, de que el sistema institucional actual, que define a Bolivia como un país “unitario” –casi una ironía– es, por el contrario demasiado inflexible e inadecuado para contener –o liberar, según sea el caso– nuestras diferencias.

Nuestra diversidad geográfica, étnica y social es tan vasta que mantener el sistema de nación unitaria a rajatabla es insostenible. Movernos hacia una federalización podría ser riesgoso y dividir al país, pero algún tipo de flexibilización de nuestro sistema jurídico e institucional podría ser sano y conveniente.

Un pequeño paso en ese sentido, que podría luego profundizarse, sería la elección popular de prefectos. Esa decisión no debería llenarnos de pánico como ocurre con algunos políticos conservadores que ni siquiera quieren oír del tema. El voto por la autoridad política más importante de la provincia, departamento o región –según sea el caso– no es algo inusual en el ámbito latinoamericano, y menos aún –obviamente– en los países que son federalistas, como Argentina o Brasil.

Elegir al Prefecto por el voto directo de la población ayudaría en gran parte a mejorar la cualidad de la representatividad nacional. Daría grandes oportunidades de que los prefectos de La Paz fueran generalmente aimaras, que son la mayoría de la población en el departamento. Y en Potosí y Cochabamba, podrían ser dirigentes quechuas. Etc. Sería como en la ciudad de Washington, de mayoría negra, en la que el alcalde por lo general es un político afro-americano. Aunque, no siempre, y esa es la riqueza de la democracia.

[Y después, la propia democracia iría limando las diferencias. A la larga, una persona podría ganar como diputado uninominal de la zona sur de La Paz independientemente de su etnia o su origen. Debería importar entonces si tiene una buena propuesta para llevarla adelante en el Parlamento. Por eso, también, la población mayoritariamente aimara como la del departamento de La Paz podría elegir a un ciudadano criollo como Prefecto si sus planes son buenos. A eso debemos tender, para ir borrando, poco a poco, la muletilla de Felipe Quispe, de dividir a los bolivianos en “ustedes y nosotros”. Hoy ese sentimiento es genuino y corresponde a una realidad de exclusión. Ojalá en unos años todos seamos “nosotros, pero diferentes”. Algo más sobre “ustedes y nosotros”.

Tendemos a pensar que un aimara es, necesariamente, “indigenista” y contrario a algunos valores liberales en economía y en política. Ello no tiene por qué ser así.

Cuando en Bolivia se designe al ministro de Hacienda solamente por lo que ha aprendido en la universidad y ese cargo recaiga en un aimara, con naturalidad, habremos dado un paso importante hacia la integración. Podrían existir aimaras y quechuas neoliberales, por su puesto, como hay blancos indigenistas. Cuando el origen étnico deje de obsesionarnos habremos eliminado el “ustedes y nosotros”.

En ese caso, la designación de Mateo Laura en la prefectura de La Paz no sería una simple anécdota sino parte de un proceso de democracia menos formal y más participativa que la actual. Pero el tema no debería concluir allí. La ley de descentralización establece un mecanismo conservador y errado para designar al Consejo Departamental: a través de un voto indirecto –calificado– los concejales municipales designan a dedo a unos caballeros que nadie conoce y cuyo trabajo nunca es puesto a consideración de la opinión pública. Por eso, esos consejos, desde que existen, no han servido para nada.

Por lo tanto, junto con el Prefecto, los miembros del Consejo también deberían designarse por voto, con lo que cambiarían la “ese” por la “ce” en su denominación. Serían concejales departamentales, con todas las capacidades de fiscalización y control. Si se fiscaliza al Presidente de la República, a todo el gobierno y a los 315 alcaldes municipales, no se entiende bien por qué no debería haber un órgano similar que fiscalice al Prefecto, que tiene importantes atribuciones y un millonario presupuesto que administrar. Las prefecturas son las “hijas opas” de la descentralización y de la participación popular. No ejecutan sus presupuestos, anidan la corrupción y demuestran una gran ineficiencia (con honrosas excepciones, como en todo). Seguir con el esquema actual, por eso, es una necesidad.

Esos concejos electos por la población deberían ser, finalmente, los encargados de designar a los subprefectos. Así, el representante más directo del gobierno central en la gente tendría más visos de credibilidad y legitimidad.

No hay solamente razones teóricas o ideológicas para movernos hacia esa reforma. Hay también razones prácticas. Cuando se supo, unos días después de las elecciones presidenciales del 30 de junio, que el aimara Evo Morales había alcanzado el segundo lugar de los comicios y que, por lo tanto, tenía chances para ir a la segunda ronda congresal y –horror, ser electo Presidente– corrió inmediatamente el rumor de que en una situación como esa (un aimara sentado en la silla presidencial), los cruceños organizarían un movimiento independentista y fraccionarían al país.

Esa situación no es tan descabellada. Nuestros abismos culturales, regionales, sociales y étnicos demuestran que la unidad del país es tan frágil que se pone en riesgo cuando un candidato que no pertenece a los partidos tradicionales llega al segundo lugar en los comicios.

Poco después, como una forma de presión respecto del puerto a ser elegido para exportar el gas boliviano a EEUU y México, los tarijeños dijeron que buscarían una semi autonomía o que, de frentón, se independizarían del país.

Nuestra propia génesis nacional demuestra que nacimos como república en circunstancias llenas de dudas y que parte de los ciudadanos de entonces no estaban tan seguros de que Bolivia debería ser independiente. Esos ecos siguen muy claros aún hoy. El sistema unitario, por tanto, está por encima de la historia y de la realidad cotidiana. Hay que admitir que a los bolivianos nos dividen todavía una serie de rencores, desconfianzas mutuas y recelos. Hay que aprender a convivir con estas circunstancias, obviamente, para ir las subsanando, pero no está mal que demos pasos que nos ayuden a convivir mejor. Y mejor es flexibilizar de algún modo el sistema jurídico-institucional del país. Sería un primer paso para que los departamentos y regiones del país no estén unidos unos a otros por el frío pegamento de las leyes sino por el cálido compartir de valores y de rasgos comunes. Para ahuyentar la “Nación Camba”, para ahuyentar la “Nación Chapaca”, para ahuyentar la “Nación del Kollasuyo”, todos en el país debemos sentirnos parte del todo pero sabiendo respetadas nuestras diferencias. Una semi autonomía regional, (y subregional, porque en un mismo departamento hay sensaciones, cosmovisiones y grupos étnicos diversísimos) que deberá ser estudiada y analizada con

cuidado, debería ser un paso ineludible para seguir adelante. Sería la fase segunda luego de la elección por voto del Prefecto. La tercera, de mediano plazo, sería reformar los límites geográficos de nuestros departamentos para que tengan mayor coherencia cultural y geográfica. La provincia Iturrealde, en el norte de La Paz, ¿no debería ser parte de Pando? ¿Y la provincia Vaca Diez, que aloja a las ciudades de Riberalta y Guayaramerín, en el Beni, no debería ser un departamento independiente? ¿Y cuándo será creado el departamento del Chaco, tomando provincias de Tarija (Gran Chaco) Chuquisaca (Hernando Siles) y Santa Cruz (Cordillera)? Hay que cambiar la fotografía jurídica de Bolivia, que ya está ajada y vieja, y que huele a siglo XIX, por una nueva, que haga más eficiente la distribución de los recursos de la coparticipación tributaria y de las regalías (aunque en el caso de la exportación de gas ello podía generar inmensos conflictos).

No han aprendido nada

La gente votó por el cambio el 30 de junio. Pero ha obtenido más de lo mismo. La sensatez indicaba que en vez del cínico parcelamiento gubernamental que han hecho el MNR y el MIR después de su insólita alianza [hubiera sido mejor para todos un acuerdo solamente parlamentario, para no agredir tanto a la opinión pública] los dos partidos atendieran a los pedidos de la gente: evitar la partidización del gabinete y de toda la jerarquía del Poder Ejecutivo (hicieron lo contrario), invitar a independientes sin tacha a ocupar cargos importantes (hicieron lo contrario) y darle al Gabinete y a los cargos jerárquicos del gobierno la misma cara del nuevo Parlamento, haciendo participar a los sectores indígenas (hicieron lo contrario, con algunas excepciones). En esta primera fase del gobierno de Sánchez de Lozada, hemos visto la señales opuestas a las requeridas. Para que la gente de clases medias y bajas, además de los sectores rurales, pudieran tolerar la conformación de la Nueva Mega (los sectores acomodados y empresariales, por el contrario, aplaudieron la alianza) el MNR y el MIR debieron actuar tratando de no irritarlos. Pero han actuado poco menos que asaltando el Estado a la vieja usanza, chantajeándose permanentemente, evitando la pronta designación de cargos jerárquicos para ganar más espacios de poder, etc. No han entendido absolutamente nada. El pacto entre el MNR y el MIR coloca, ahora sí frente a frente de manera clarísima, a los dos bolivias. En un lado los partidos tradicionales, ligados al empresariado, y en el otro el MAS y el MIP, representantes de los sectores campesinos y rurales. Con el MIR en la oposición, Jaime Paz hubiera podido jugar un rol de centro, un rol articulador entre estas dos cosmovisiones contrapuestas y excluyentes. [El MIR y Jaime Paz Zamora hicieron durante la Convención del MIR lo que les indicaba su instinto de supervivencia: no aceptar una alianza con su tradicional adversario. Supervivencia, porque seguramente intuyeron –transitoriamente– que conformar una Nueva Mega provocaría la “ucesisación” de su partido y su marginalidad política en el mediano plazo. Los miristas actuaron temporalmente bien. En un principio, en ese partido pesó el hecho de que era casi intragable aliarse y viabilizar a quien casi los destruye, a quien desprecian por supuestos hechos de corrupción, como el caso Enron, y que acusan de haber ejecutado políticas antinacionales, como la reducción de las regalías de la exportación de gas]. Al inclinarse por uno de los dos polos, ha dejado al país sin capacidad de crear una bisagra con la Bolivia profunda de Felipe Quispe y Evo Morales. NFR no tendrá posibilidad de ser mediadora. Esa polarización podría agravarse en el futuro. A estas horas, dirigentes del MAS y el MIP deben batir palmas: según lo creen las capas más empobrecidas y marginadas, los políticos de siempre, los corruptos que han robado durante 20 años, los partidos tradicionales que se reparten el poder han

vuelto a unirse en un acuerdo por pegas, un acuerdo que parcela el Poder Ejecutivo y que no piensa en los verdaderos intereses del país.

Si el acuerdo entre MNR y MIR hubiera sido realmente programático, ¿cómo fue posible que se pusieran de acuerdo quienes hasta hace poco se calificaban como “vendepatrias” o “causantes de la crisis”? ¿Qué programa podría por ventura haber conciliado verdaderamente sus puntos de vista rotundamente diferentes en temas tan delicados como la salida del gas por Chile, la revisión de la Ley de Hidrocarburos, la Constituyente, el fortalecimiento de YPFB desde el Estado, el pago del Bonosol?

Hay una alta dosis de cinismo en este acuerdo. Y no es que los bolivianos no hayamos sido testigos antes de hechos similares, pero la capacidad de la población para tolerarlos no es la misma que en años anteriores. Por eso se explica el 29 por ciento del voto del MIP, MAS y LyJ y el 21 por ciento de NFR. La mitad del país. Al que hay que añadir el 17 por ciento del MIR que pedía reformas profundas por lo menos a la capitalización. Hasta aquí, este ha sido un gobierno sin alma. Unos militantes mirándose con recelo en el seno mismo del Ejecutivo, que lo único que quieren es no perder los espacios de poder, podrían hacer una gestión gubernamental sin verdadero interés ni compromiso. Dijimos más arriba que el 30 de junio se castigó a los partidos tradicionales y a una forma de hacer política desde 1982. Y que el país marcha a una polarización que podría generar violencia y desestabilización. Pero el MIR y el MNR no parecen querer entenderlo y siguen haciendo política de la vieja manera: la de María Antonieta rumbo a la guillotina, preguntándose por qué la plebe reclama pan si podía comer torta.